



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Medio de Control:	Controversias Contractuales
Demandante:	Cooperativa Empresa Promotora de Salud Subsidiada- COMPARTA EPS
Demandado:	Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Radicación:	15001 3333 004 2019 00053 00

1. ASUNTO POR RESOLVER

El presente proceso fue repartido a este Despacho, luego de que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja ordenara su remisión a los Juzgados Administrativos del Circuito de Tunja (Reparto). En consecuencia, se estudiará si el caso que nos ocupa es competencia de este Estrado Judicial.

2. ANTECEDENTES

El expediente de la referencia fue radicado el 14 de diciembre de 2018, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, el cual, a través de auto de 21 de febrero de 2019, resolvió rechazar la demanda por falta de jurisdicción y ordenó su remisión a los Juzgados Administrativos del Circuito de esta ciudad (Reparto).

Repartido el expediente correspondió su conocimiento a este Despacho (fl. 3121).

Así las cosas, el Despacho advirtió que las pretensiones de la demanda, en lo fundamental se contraen a lo siguiente:

"-Que en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se declare que COMPARTA EPS autorizó y garantizó la prestación del servicio NO POS y que existe la facultad legal de recobro ante la Subcuenta de Compensación-Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y de la Protección Social, hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), servicios que fueron ordenados en fallos de tutela y autorizados por CTC, por concepto de medicamentos e insumos...

(...)

3023

-Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social a cancelar a la demandante por concepto de 217 solicitudes de recobros, la suma total de \$271.458.054...

(...)

-Que se declare y ordene que la condena a que se refiere la segunda pretensión se le aplique los intereses moratorios, conforme a los criterios señalados por la Jurisdicción Ordinaria Laboral, desde el momento en que debieron sufragarse y hasta que se efectúe el pago total de la obligación.

-Que se declare y ordene que la condena a que se refiere la segunda pretensión, se le aplique la indexación y/o corrección monetaria, conforme a los criterios señalados por la Jurisdicción Ordinaria Laboral, desde el momento en que debieron sufragarse y hasta que se efectúe el pago total de la obligación.

-Que se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho que se ocasionaren con motivo de la presentación de la demanda."

3. CONSIDERACIONES

En primer lugar, debe tenerse en cuenta como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional¹ y del Consejo de Estado², que la determinación de la jurisdicción es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, que implica la garantía de ser juzgado por el funcionario judicial a quien el ordenamiento jurídico previamente le ha atribuido dicha competencia.

En este orden, el sector de la Rama Judicial especializado en administrar justicia en los asuntos laborales y **de seguridad social** hace parte de la jurisdicción ordinaria, cuyo rasgo característico es su **cláusula general o residual de competencia**, en relación con las demás jurisdicciones constitucional y legalmente reconocidas, así conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado por el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009, la jurisdicción ordinaria "*conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción*".

Bajo este contexto, se encuentra que el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, indicó lo siguiente:

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-685 de 26 de septiembre de 2013.

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Auto de 3 de junio de 2015, Exp. 53.351.

*“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: [...] 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, **salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos**” (Resaltado del Despacho).*

Por su parte, el numeral 4 del artículo 104 del CPACA estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia laboral y de seguridad social conoce de los procesos *“relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la **seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público**”* (Resaltado del Despacho)

Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir un conflicto negativo de competencias entre las jurisdicciones laboral y administrativa, dispuso:

“En efecto, resulta evidente que, de la demanda presentada por la EPS. Suramericana S.A., no surge un proceso judicial relativo a la seguridad social de los empleados públicos cuyo régimen sea administrado por una persona de derecho público. Por lo cual, siendo este tipo de litigio el único que en materia de seguridad social quedó taxativamente reservado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe entenderse que, en aplicación de la cláusula general y residual de competencia de la jurisdicción ordinaria, en los términos del artículo 12 de la ley estatutaria 270 de 1996, la jurisdicción competente para el recobro al Estado por prestaciones NO POS es la ordinaria.

*Más concretamente, dado que es una controversia propia del sistema de seguridad social en salud, entre actores de dicho sistema, sobre recursos del sistema y derivada de la prestación de servicios de salud a usuarios del sistema, le corresponderá a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social”.*³

En providencia de 3 de diciembre de 2014⁴, el Consejo Superior de la Judicatura dirimió un conflicto de competencias que surgió con la presentación de una demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En esta oportunidad, la Corporación añadió que:

³ Consejo Superior de La Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia de 11 de junio de 2014, radicación número 110010102000201302787-00.

⁴ Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia de 3 diciembre de 2014, radicación número 110010102000201401737-00 (9656-20).

"[...] ha encontrado la Sala que es la Jurisdicción Ordinaria a quien le corresponde dirimir la presente litis, toda vez que la controversia se suscitó entre una entidad administrativa prestadora del servicio de salud de carácter particular y una entidad pública, situación que sin lugar a dudas, se enmarca en lo normado y ya referido numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral".

De igual manera, el Consejo de Estado señaló que las acreencias ocasionadas por la prestación de servicios de salud deben ventilarse en la Jurisdicción Laboral, así:

*"Si, como quedó visto, en el caso concreto el demandante pretende el cobro de las obligaciones nacidas por virtud de la prestación de servicios de urgencias a los afiliados y con fuente en la ley habrá de concluirse que se trata de acreencias cuya ejecución compete a la jurisdicción ordinaria. No basta la demostración en esta jurisdicción contencioso administrativa que el ejecutante alegue ser acreedor; se requiere que demuestre que la acreencia tiene fuente, directa o indirectamente, en un contrato estatal de aquellos que son de conocimiento de esta justicia. Como la ejecución iniciada en el caso no es de fuente contractual, sino legal, por la prestación, ordenada en la ley, del servicio de atención de urgencias (ley 100 de 1993, art. 168), se carece de jurisdicción, hecho constitutivo de nulidad procesal insaneable, a términos del CPC (num 1 art. 140)."*⁵

Más recientemente, el Alto Tribunal reiteró la posición acogida, de la siguiente manera:

*"Resulta así claro que, de acuerdo con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.4 del Código de Procedimiento Laboral, en su versión vigente en el momento en que fue presentada la demanda, correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de los asuntos en los que se pretenda la declaración de la obligación del Fosyga de pagar los servicios de salud prestados que hayan sido rechazados con glosas, con la correspondiente condena, como en el sub lite."*⁶

En este orden de ideas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.4 del Código de Procedimiento Laboral y la cláusula general o residual de competencia establecida en el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, modificado por artículo 5 de la Ley 1285 de 2009, así como la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sección Tercera del Consejo de Estado, resulta claro que corresponde a la Jurisdicción Laboral el conocimiento de los casos en los que se pretende la declaración de la obligación del

⁵ Consejo de estado, Sección tercera. Auto de 7 de junio de 2001, exp. 19.475.

⁶ Consejo de estado. Sección tercera. Auto de 17 de julio de 2018, Sección Tercera, exp. 42400

FOSYGA de pagar los servicios de salud prestados y que hayan sido rechazados con glosas, conforme se presenta en el caso bajo estudio.

En consecuencia, este Estrado Judicial se abstendrá de avocar conocimiento por carecer de jurisdicción y propondrá **conflicto negativo de competencias** para conocer del presente asunto, conforme lo estipula el artículo 139 del CGP:

“Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso...” (Resaltado del Despacho).

Ahora bien, como el presente conflicto negativo de competencias se propone entre juzgados de diferente jurisdicción, esto es, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral, también de esta ciudad, de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo, el superior en común es el Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto, es el competente para dirimir el conflicto.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja.


RESUELVE:

Primero: Declarar que este Juzgado **carece de jurisdicción** para adelantar el presente proceso, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: **Proponer el conflicto negativo de competencia** para el conocimiento del presente asunto, de acuerdo a lo indicado en la motivación.

Tercero: Por secretaria, **remítase** el expediente por intermedio del Centro de Servicios para los Juzgados Administrativos al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia, dejando las anotaciones a que haya lugar.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
JUEZ

7 AMRS

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRÓNICO

N° 16 De Hoy 10 de mayo de 2019
A LAS 8:00 a.m.


FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
Secretario

Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 10 de mayo de 2019 en la página web www.tribunadecol.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario